

Santiago, veintitrés de enero de dos mil veintitrés

Vistos:

En los autos Rol N° 94891-20, la Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de dos de julio de dos mil veinte, al revocar el fallo absolutorio de primera instancia, en su lugar condenó a **Sylvia Teresa Oyarce Pinto** a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, como autora del delito de secuestro calificado de Miguel Enrique Rodríguez Vergara, cometido el 17 de noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago.

Contra esa sentencia el apoderado de la condenada dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

Y considerando:

1º) Que el recurso de casación en la forma deducido se funda en la causal 9a del artículo 541 del Código Procedimiento Penal en relación con el artículo 488 y numerales 4 y 5 del artículo 500 del mismo cuerpo legal, considerándose como infringidas las normas de los artículos 488, 464 en relación con el 210, 343, y 110, todos del mismo Código, por no fundarse el fallo en hechos reales y probados, no haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley, y no contener la sentencia las consideraciones por las cuales se den por probados o no probados los hechos atribuidos a Oyarce Pinto. Precisa que el error consiste en apreciar la sentencia los antecedentes de manera limitada, omitiendo otros que están a la vista en el mismo fallo.

Pide invalidar la sentencia impugnada y dictar una nueva conforme a la ley y al mérito del proceso

2º) Que los hechos que ha tenido por ciertos la sentencia impugnada son los siguientes:



“1°.- Que la Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como DINA, nace como entidad represiva del Estado en el mes de junio de 1974 y al mando del organismo siempre estuvo su Director Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido, y para cumplir sus fines ilícitos de detenciones e interrogatorios en centros de reclusión clandestino, contaba con numerosos agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden, en ocasiones dicha conducta violenta llevó a la ejecución y desaparición de sus víctimas;

2°.- Que los agentes encargados de efectuar las operaciones del organismo, se encontraban vinculados a la llamada Brigada de Inteligencia Metropolitana, que a la fecha de estos hechos era dirigida por Marcelo Moren Brito, actualmente fallecido, y por su Jefe de la Plana Mayor Rolf Wenderoth Pozo, la cual se fraccionaba en dos agrupaciones, Caupolicán y Purén, y contaba para sus interrogatorios y encierros clandestinos con varios recintos de reclusión como lo fueron Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venda Sexy;

3°.- Que la llamada Brigada Caupolicán actuaba en terreno con varios grupos operativos, que procedían bajo la nomenclatura de Águila, Halcón I y II, Tucán y Vampiro, y sus integrantes estaban encargados de detener, interrogar y finalmente, decidir el destino de los detenidos;

4°.- Que en este contexto, Miguel Enrique Rodríguez Vergara, militante del Partido Socialista, es detenido en su domicilio ubicado en San Pablo 5470, el día 17 de noviembre de 1975, a las 10,30 horas, por tres agentes de civil que se identificaron como integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, los que luego de allanar el inmueble, le llevan detenido con rumbo desconocido al parecer al cuartel de reclusión clandestino Terranova o también conocido como Villa Grimaldi, sin que hasta ahora se tengan noticias de su paradero ni se haya determinado su fallecimiento;”



Estos hechos fueron calificados en la sentencia impugnada como constitutivos del delito de secuestro, previsto y sancionado en los artículos 141 inciso 1° y 3° del Código Penal, en relación con el inciso 4° del mismo articulado, que lo califica por el tiempo que se prolongó la acción y por las consecuencias de la misma, resultando un grave daño en la persona o intereses del secuestrado Miguel Enrique Rodríguez Vergara.

3°) Que como ha sido reiteradamente explicado por esta Corte, la causal de casación del N° 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal no tiene por objeto revisar si la sentencia impugnada valoró respetando las normas reguladoras de la prueba los antecedentes incorporados en las instancias del juicio, sino solo si cumplió con realizar esa valoración de manera real y no aparente, quedando reservada la promoción del examen de cualquier error en la aplicación o la falta de aplicación de esas normas reguladoras, a la respectiva causal del recurso de casación en el fondo.

4°) Que en el caso *sub lite* el fallo en análisis cumple sobradamente con las exigencias de fundamentación que demandan los N°s 4 y 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, como se observa de la lectura de sus considerandos 2° a 9°, en los que detalla las razones por las cuales estima que las probanzas reunidas sí permiten concluir la participación de Oyarce Pinto en los hechos imputados, haciéndose cargo de las razones que generaron las dudas en el juez de primer grado y que le llevaron a un pronunciamiento absolutorio, e incluso de los cuestionamientos de la defensa que ahora reproduce en su recurso.

5°) Que todo lo anterior evidencia que el arbitrio interpuesto no se sostiene en verdad en la omisión de consideraciones y razones legales o doctrinales, sino en la omisión de las consideraciones y razones que en opinión



del recurrente son las correctas, reclamo válido pero que debe encausarse en la correspondiente causal de nulidad, desde que el presente es un recurso extraordinario y de derecho estricto y no una tercera instancia para la valoración y revisión de la prueba de autos.

6°) Que por las razones expuestas el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 500 y 541 del Código de Procedimiento Penal; y 767 y siguientes del de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto por el apoderado de **Sylvia Teresa Oyarce Pinto** contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de dos de julio de dos mil veinte.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 94891-20

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y Sra. María Teresa Letelier R. No firman los Ministros Sres. Brito y Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por subrogar al Sr. Presidente y por estar con feriado legal, respectivamente.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

